

EDITORIAL

OTRO AÑO DE GUERRA CIVIL

A comienzos del año pasado, ECA afirmaba en su editorial que 1982 sería un "año decisivo para El Salvador". Se basaba esta afirmación en la lección que se debía sacar de 1981 de que los medios hasta entonces utilizados para resolver el conflicto del país y, en particular, la guerra habían mostrado su costosa ineficacia, así como en la evidencia de que seguir usando esos medios sólo conduciría a un agravamiento de la crisis. 1982 sería un año decisivo porque podía "llevar a una salida de la situación mortal en que nos encontramos" o podía "llevar a radicalizarla y enconarla hasta límites desesperados". Desgraciadamente, un balance objetivo de este año lleva a la conclusión de que el país no ha salido de su situación mortal, sino que el conflicto se ha radicalizado y agravado. Las lecciones de 1981 no fueron aprendidas, y El Salvador entra en 1983 enfrentando el mismo dilema de muerte o vida que en 1982, aunque ahora desde condiciones mucho más desfavorables.

1982 ha vuelto a mostrar con sus trágicos costos que la guerra no es el camino para salir de la crisis, pero ha mostrado además que la vía electoral por sí sola no es ni puede ser la solución al conflicto salvadoreño. Esto confirma la afirmación que hacíamos en aquel editorial: "no es cierto que la alternativa sea elecciones o guerra hasta el final; la alternativa real es guerra hasta el final o solución política". El país ha tenido unas elecciones y la guerra no sólo no ha amainado, sino que se ha recrudecido y con ella los problemas que abruman al pueblo salvadoreño. ¿Seguiremos a lo largo de 1983 incurriendo en el mismo error de no aceptar el camino difícil, pero realista, de hallar una solución política al conflicto nacional? ¿Seguiremos cerrando los ojos a la evidencia de que sólo en un proceso que tome en cuenta a todas las fuerzas sociales encontraremos salida a esta trágica guerra civil que nos arruina y desangra?

1. El grave deterioro del país

Los datos objetivos muestran en su frialdad el gravísimo deterioro experimentado por el país a lo largo de 1982. En lo económico, el Producto Interno Bruto disminuyó en 279 millones de colones mientras que el consumo de la población descendió en un 12.2% respecto a 1981, deterioros que han de sumarse a los experimentados en los dos años precedentes y cuya magnitud es todavía mayor. El país se ha visto aquejado a lo largo de todo el año por la falta de divisas, lo que ha impedido la importación de materias primas y ha ocasionado así el funcionamiento inadecuado de la industria y el cumplimiento en el pago de deudas. El gobierno salvadoreño, volcado a financiar una guerra cuyo costo ha llegado a superar ya los dos millones de colones diarios, ha incurrido en crecientes déficits presupuestarios que ha financiado con reservas del Banco Central y haciendo cortes drásticos en los créditos a la empresa privada, con la consiguiente paralización de la vida económica del país. El colón ha ido perdiendo poder adquisitivo y, en la práctica, su valor se ha reducido a casi la mitad.

El sabotaje efectuado por el FMLN a lo largo de 1982 no sólo ha afectado a la producción, sino a la capacidad productiva del país. Sólo en lo relativo al sistema de conducción de energía, son más de 200 las torres derribadas, y es bien sabido que la región oriental del país ha pasado la mayor parte del año sin energía eléctrica con el consiguiente trastorno y paralización de la actividad económica. De las 45 máquinas de tren de que disponía FENADESAL, apenas una media docena no han sido afectadas por el sabotaje, y más de un 35% de los casi tres mil buses de que se disponía a principios de 1980 han sido destruidos o averiados por acciones insurgentes. Súmese a ello las líneas telefónicas dinamitadas, los puentes destruidos, los beneficios quemados, las cosechas perdidas, los campos arrasados, los edificios bombardeados, las fábricas abandonadas, por no mencionar la continua evasión de capital, y apenas se tendrá una imagen aproximada de lo que la guerra está costando al sistema productivo del país.

Pero si graves son los costos materiales de la guerra, más graves son aún los costos sociales y humanos. Estimaciones conservadoras calculan que el desempleo efectivo alcanza al 38% de la población económicamente activa, y el desempleo encubierto puede alcanzar niveles de auténtica tragedia. El desempleo se traduce en hambre, miseria, enfermedad y frustración para miles de familias, con secuelas adicionales como las migraciones o un incremento en la delincuencia de todo tipo. Pero incluso aquellos que cuentan con un empleo han visto erosionarse continuamente el poder adquisitivo de su salario, congelado por virtud de un decreto que sólo se ha aplicado con efectividad a los sectores trabajadores. De acuerdo con cálculos moderados, el



poder adquisitivo del salario mínimo ha descendido a un nivel equivalente al de hace más de una década. Por otro lado, han empezado a proliferar enfermedades y plagas de diversos tipos, sobre todo de la piel, mientras escasean las medicinas en el país y han cerrado 31 centros asistenciales. Todo ello refleja una situación de verdadera catástrofe. Por si fuera poco, un terremoto y las inundaciones provocadas por un temporal arrasaron con viviendas y plantaciones, añadiendo la destrucción de los elementos naturales a la destrucción causada por la mano humana.

A pesar de la gravedad del panorama presentado, el problema más acuciante y deplorable del país continúa siendo la falta de respeto a la vida humana. Se habla ya de 40,000 víctimas de la guerra, la mayor parte de ellas atribuidas a la represión realizada por cuerpos de seguridad o fuerzas paramilitares. A lo largo de 1982 ha habido por lo menos 4,419 personas asesinadas cuyos casos han podido ser documentados, y 1,045 personas capturadas y/o desaparecidas, unas y otras de la población civil. Según la Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, ascenderían a 5,445 los asesinatos políticos en 1982, de los cuales 5,399 son atribuidos a cuerpos de seguridad, fuerzas militares o fuerzas paramilitares derechistas, y apenas 46 (menos del uno por ciento) se pueden atribuir a grupos de izquierdas. Por otra parte, el mismo Arzobispado ha ofrecido una detallada documentación sobre 499 presos políticos, actualmente reclusos en el Penal de

Mariona, a quienes ni siquiera se aplican las cláusulas del Decreto 507, ya de por sí atentatorias a la justicia. Ante este panorama resulta superficial cuando no cínico hablar de mejoría en el respeto a los derechos humanos, sobre todo cuando la maquinaria represiva permanece intacta e impune, lista a actuar cuando los intereses que respalda así lo requieren.

Esta imagen del país no pretende ser una imagen total, sino una imagen del deterioro experimentado, no por limitada menos real. La relativa calma de que disfrutaban quienes viven en la capital, San Salvador, puede fortalecer la errónea impresión de que la guerra civil es algo circunstancial y de poca monta. Los datos apuntados demuestran fehacientemente todo lo contrario y más bien ponen de manifiesto la estremecedora situación en que cada vez nos hunde más y más esta guerra fratricida. Presentar estos datos no es contribuir a la mala imagen del país; la imagen la crea quien causa la realidad reflejada. Poner de manifiesto estas condiciones trágicas no es desinformar; desinforma más bien quien las oculta y niega. No se cura negando la enfermedad, sino analizándola objetivamente y aplicando el debido remedio. El saldo de 1982 demuestra una vez más que la guerra no está ayudando a curar los problemas del país, sino que los está agudizando. Es imperativo por tanto terminar con ella y terminar cuanto antes, de modo que se pueda empezar con la ingente tarea de reconciliar a la población en la justicia y reconstruir el país en la paz.

2. Luces y sombras del proceso electoral

En 1982 se ha puesto a prueba el mecanismo electoral como instrumento político para resolver el conflicto salvadoreño. Los nueve meses transcurridos desde el 28 de marzo son ya tiempo más que suficiente para asegurar que las elecciones no nos han acercado a la paz, sino que han servido para amparar la continuación de la guerra y hasta de justificación a su profundización. Con ello han demostrado la validez de lo que en varias ocasiones ECA había afirmado en sus editoriales: que las elecciones por sí solas no constituían una alternativa a la guerra civil, sino su complemento y ello tanto en los hechos como en la intención de sus promotores. Las elecciones no han resuelto la guerra porque ni lo pretendían ni tienen la posibilidad de lograrlo, al menos mientras no se consiga la participación de todas las fuerzas representativas del país; y eso, claro está, no va a ser posible sin un acuerdo previo con la verdadera oposición, con los insurgentes. Afirmar que el mismo esquema aplicado a las elecciones pre-

1982 ha vuelto a mostrar con sus trágicos costos que la guerra no es el camino para salir de la crisis, pero ha mostrado además que la vía electoral por sí sola no es ni puede ser la solución al conflicto salvadoreño.

sidenciales va a lograr lo que no se consiguió con la elección de una Asamblea Constituyente es volver a cerrar los ojos a la evidencia, u ocultar un proyecto belicista que reclama la aniquilación de muchos miles, quizás cientos de miles de salvadoreños. No se niega el posible valor de un proceso electoral; se niega su virtualidad para resolver el actual conflicto salvadoreño y lograr la paz mientras no se den algunas condiciones mínimas y, ante todo, el alto a la confrontación armada.

El proyecto electoral, ideado y promovido por el gobierno norteamericano, fue concebido con una doble finalidad: por un lado, fortalecer en el poder al sector reformista (la Democracia Cristiana), legitimando su postura con el voto popular y reforzando así su capacidad negociadora con la Fuerza Armada; por otro lado, ganar el tiempo político necesario para que la masiva ayuda militar, incluidos los batallones especiales entrenados por norteamericanos y las nuevas y poderosas armas proporcionadas, se tradujeran en una progresiva eliminación del movimiento revolucionario hasta llegar a su total aniquilación. Las elecciones servirían también para justificar internacionalmente la política de Estados Unidos hacia El Salvador y debilitar de esta forma el apoyo logrado en el foro de las naciones por el FDR-FMLN.

El proyecto electoral y los acontecimientos por él desencadenados en 1982 sólo se entienden en el contexto de la lucha por el poder entre dos sectores de los grupos dominantes: aquellos que buscan un simple restablecimiento del esquema social y de gobierno anterior a 1979 y aquellos que pretenden introducir algunas reformas en ese esquema. Los primeros representan los intereses de la oligarquía salvadoreña, mientras que los segundos expresan los intereses norteamericanos. Unos y otros coinciden en el objetivo fundamental de eliminar al movimiento revolucionario e impedir el acceso al poder de los grupos populares, pero mientras los unos aspiran a conseguirlo mediante los mismos mecanismos opresivos utilizados en el pasado, los otros buscan eliminar o al menos paliar las raíces de la rebeldía realizando algunas reformas sociales.

De hecho, ninguno de los objetivos principales del proceso electoral fue logrado, y tan sólo sus promotores obtuvieron la ganancia de un margen temporal, aunque importante, de apoyo internacional. Más aún, la votación de final de año en el seno de las Naciones Unidas, donde se aprobó una resolución sobre la situación de El Salvador fuertemente opuesta por los Estados Unidos, mostró lo efímero del efecto internacional producido por las elecciones y el poco poder convincente de largas filas de votantes frente a largas filas de asesinados o desaparecidos.

El resultado principal de las elecciones del 28 de marzo fue el contrario al buscado por sus promotores: en lugar de salir fortalecida, la postura reformista salió debilitada del proceso, y la Democracia Cristiana fue prácticamente desplazada del poder.

El gran ganador del proceso electoral resultó ser el proyecto promovido por la oligarquía, principalmente representada en la Alianza Republicana Nacionalista, comandada por el Mayor Roberto D'Aubuisson. Las elecciones dieron a ARENA y a su líder una legitimidad que habían perdido formalmente con el golpe de Estado del 15 de octubre. Desde entonces, el discurso de "las dos extremas" y un "centro moderado" perdió todo su sentido, al confundirse en una unidad "centro" y "extrema derecha".

La legitimación y el acceso al poder de los representantes del proyecto oligárquico arrastró no sólo la acumulación práctica de las reformas iniciadas por la Junta de gobierno anterior, sino sobre todo la imposibilidad de adelantar una política gubernamental coherente. Con el 28 de marzo se puso fin al proceso iniciado el 15 de octubre de 1979 por oficiales jóvenes de la Fuerza Armada, y se dio el carpetazo final a los anhelos de cambio y justicia social expresados en la proclama militar. Sin embargo, las contradicciones puestas de manifiesto en la insurrección militar volvieron a enseñorearse del gobierno de relevo surgido del 28 de marzo. La contraposición de los intereses expresados por ARENA y el PDC impidió que se lograra un acuerdo sobre la repartición de poder en el nuevo gobierno, e hicieron falta drásticas presiones de los Estados Unidos para que se llegara a un "gobierno de unidad nacional". Como presidente de compromiso fue elegido el Dr. Alvaro Magaña, hombre cercano a los militares y hábil para la negociación, pero sin más respaldo real que el que pudiera ganar en la articulación de intereses. No cabe duda que los logros del actual gobierno, aunque no sea más que su supervivencia, se deben en buena medida a la capacidad del Dr. Magaña. Sin embargo, ni la habilidad de Magaña ha hecho posible una política coherente entre ministros más interesados en conseguir beneficios para el propio partido que en resolver los problemas del país.

Edecanes que los atenderán, están siendo presionados para que les den una imagen distorsionada de nuestra querida patria.

EL TRIUNFO ES NUESTRO

EL TRIUNFO ES DE

ACCION DEMOCRATICA

**VOTA POR EL SALVADOR
NO PIERDAS TU VOTO
VOTA POR ARENA**

MARCA LA FLECHA
VOTA ASI

ESTE ES EL TEMOR DE DUARTE AL PASADO. **PUEBLO Y PDC**
POR ESO EL PUEBLO SALVADOREÑO, RECHA... **¡SIEMPRE ADELANTE!**
EL PROXIMO 28 DE MARZO A ESTE SIMBOLO DE ...

**VOTA AZUL. VOTA PCN.
AL PCN NADIE LO DETIENE!**



Las elecciones no han resuelto la guerra porque ni lo pretendían, ni tienen la posibilidad de lograrlo, al menos mientras no se consiga la participación de todas las fuerzas representativas del país y eso, claro está, no será posible sin un acuerdo previo con la verdadera oposición, con los insurgentes.

Aunque las elecciones no condujeron a las metas que habían buscado sus promotores, supusieron un quiebre importante en la evolución política del país que ha condicionado en forma significativa los acontecimientos ulteriores. Ya decíamos en una de las tesis de nuestro editorial de abril del año pasado que "el evento del 28 de marzo, a pesar de no constituir unas elecciones nacionales ni siquiera unas elecciones estrictamente tales; a pesar de que con toda probabilidad constituyeron un fraude masivo, que desfigura y deslegitima sus resultados, constituyen un acontecimiento político de una gran importancia". Por inflados que estuvieran los resultados de la votación, es innegable que un buen número de salvadoreños acudió por su cuenta y riesgo a las urnas. Más allá de toda interpretación, es un hecho que el pueblo salvadoreño desea expresar su opinión sobre el futuro de su patria y que no desperdicia ocasión para hacerlo. Parece también fuera de duda que un porcentaje elevado de quienes votaron lo hicieron con la convicción de que su voto ayudaría a obtener la paz. Ahí residió quizá la más dolorosa paradoja de un mecanismo anunciado como camino hacia la paz y utilizado después como justificación para la guerra.

Tal vez el resultado más positivo de las elecciones del 28 de marzo fue el abrir de nuevo el ámbito nacional a la acción política, por restringida que fuera esta apertura. 1981 supuso una clausura tan drástica del espacio político en el país que cualquier resquicio aporta un aire purificador. Las elecciones propiciaron ese resquicio, no por pequeño despreciable. Supusieron, también, una desabsolutización del esquema puramente militar, al cual parecían haberse abocado ambos bandos. Por desdicha, esta apertura no se ha extendido a los ámbitos sindicales y campesinos, continuamente golpeados por la represión, o a la verdadera oposición, como lo demostró el arresto por un cuerpo de seguridad de varios dirigentes moderados del FDR. Con todo, es innegable que las elecciones desencadenaron dinamismos nuevos en el ámbito nacional, y que ulteriores acciones militares de lado y lado tuvieron que buscar un significado político sin el cual carecían de sentido y de eficacia.

Con la firma del llamado "Pacto de Apaneca", el gobierno salió transitoriamente del estancamiento producido por la "guarduña" de puestos y prebendas entre los partidos involucrados en las elecciones. El Pacto establecía un acuerdo entre los principales partidos en el poder (ARENA, PCN, PDC más el PPS) sobre una plataforma básica de gobierno que se materializaría en el es-

tablecimiento de varias comisiones conjuntas orientadas a atender los principales problemas del país: la pacificación, la democratización, los derechos humanos, la recuperación económica, las reformas, la confianza y seguridad y el fortalecimiento internacional. La comisión más importante fue la política, que de hecho asumió un poder que en principio correspondía a la Asamblea Constituyente. En la práctica la comisión política, con participación militar, ha sido la única que ha funcionado. A final de año se nombró la comisión sobre derechos humanos, cuya credibilidad resultó desde el comienzo afectada por el carácter de algunos de sus miembros, y resultó imposible formar la comisión de pacificación.

El consenso logrado por el Pacto ocasionó una parcial reactivación política que permitió al gobierno llegar hasta el final del año a pesar de continuas crisis y amagos de golpe de Estado. Con todo, el Pacto de Apaneca no superó las contradicciones fundamentales del gobierno nacido de las elecciones de marzo. Ante todo, su poder era limitado, tanto frente a la Fuerza Armada como frente a las otras grandes fuerzas del país, el capital por un lado, el movimiento revolucionario por otro. Además, el mismo Pacto fue concebido como parte de un proyecto más amplio, que sigue asumiendo la guerra de aniquilación contra el movimiento revolucionario como el objetivo principal e incuestionable. De ahí que sus objetivos explícitos de paz, de respeto a los derechos humanos, de democratización e incluso de reactivación económica no hayan podido superar las primeras etapas formales y los planos más superficiales de las apariencias.

Que el Pacto de Apaneca no superaba las contradicciones de los sectores en el poder lo mostró la creciente ruptura entre sectores significativos del capital oligárquico y de la Fuerza Armada, ruptura que se traduciría en amagos de conflicto entre el General García, Ministro de Defensa, y el Mayor D'Aubuisson, Presidente de la Asamblea Constituyente. El año se cerró para el gobierno con una profunda crisis de gabinete que abocaría, en los primeros días del presente año, a una crisis militar.

Por su lado, el movimiento revolucionario pareció asimilar el golpe recibido con las elecciones de marzo, y ya en junio lanzó una fuerte ofensiva militar con la que reafirmó su presencia efectiva en el país y la inutilidad de un proceso político nacional del que se excluyera al FDR-FMLN. De mayor envergadura fue todavía la campaña iniciada en octubre y que duró hasta me-

El Pacto de Apaneca fue concebido como parte de un proyecto más amplio, que sigue asumiendo la guerra como aniquilación del movimiento revolucionario, como el objetivo principal e incuestionable.

De ahí que sus objetivos explícitos de paz, de respeto a los derechos humanos, de democratización e incluso de reactivación económica no hayan podido superar las primeras etapas formales y los planos más superficiales de las apariencias.



diados de diciembre, en la que los insurgentes se apoderaron de más de veinte poblaciones e hicieron varios centenares de prisioneros. La campaña de octubre sirvió para apoyar la nueva propuesta de diálogo del FDR-FMLN. Esta propuesta, transmitida primero al gobierno por mediación de la Iglesia y hecha pública unos días después en México, no ha podido ser ignorada como las anteriores, sino que ha marcado la tónica del país en los dos últimos meses, obligando a los diversos grupos a definirse ante la eventualidad de un diálogo para la paz. Son cada vez más los grupos sociales que no entienden o rechazan ese "no" obstinado al diálogo ni creen en la sinceridad de quienes afirman querer la paz pero se cierran a todo lo que no sea rendición incondicional. La tesis de un diálogo entre los contendientes cuenta cada vez con más partidarios en el país, y las reacciones violentas de los sectores más intransigentes muestran que ellos también perciben ese creciente apoyo colectivo al diálogo como camino hacia la paz.

3. Las lecciones de 1982

1982 ha vuelto a confirmar que la guerra no va a resolver, por lo menos en un futuro cercano, el conflicto salvadoreño. Esta lección ya nos la enseñó 1981 y 1982 no hace sino reafirmarla. Resulta penoso releer declaraciones enfáticas sobre la derrota y "desbandada" de las fuerzas revolucionarias, sobre la "limpieza" de los territorios controlados por los insurgentes, sobre las victorias fulminantes que se obtendrían al cortar los suministros de armas venidos desde fuera o al contar con los batallones especialmente entrenados o con armas de gran poder destructivo. Todo ha sido inútil; por el contrario, en lugar de haber sido derrotado, el FMLN ha seguido creciendo y fortaleciéndose militarmente, hasta el punto de poder tutear a una Fuerza Armada cada vez más grande y respaldada por la maquinaria bélica norteamericana. A nadie se le oculta que la guerra no está empatada, sino que cada vez se vuelve más destructiva de parte y parte. Sirva como dato doloroso y significativo los 1269 militares muertos en combate reconocidos por la Fuerza Armada o los 2500 heridos, de los cuales por lo menos 400 han quedado liados de por vida. En 1982, la cifra total de los muertos en el campo de batalla por uno y otro bando se acerca ya al número de los asesinados por la represión.

La magnitud y capacidad de los ejércitos contendientes hace temer que, de no ponerse un alto inmediato a la guerra, el número de víctimas sea cada vez mayor, los daños ocasionados a la estructura del país sean cada vez más profundos, y la devastación en general de los fundamentos materiales y sociales de nuestra patria alcance niveles intolerables. Ningún objetivo



La tesis de un diálogo entre los contendientes cuenta cada vez con más partidarios en el país, y las reacciones violentas de los sectores más intransigentes muestran que ellos también perciben ese creciente apoyo colectivo al diálogo como camino hacia la paz.

puede subordinarse en este momento al de la obtención de la paz como paso ineludible hacia la solución de aquellos problemas que están a la raíz de la guerra.

1982 ha mostrado palmariamente que las elecciones no son por sí solas capaces de producir la paz, y ello por la obvia razón de que han marginado y pretenden seguir marginando a una de las partes contendientes. Resulta absurdo decir que el FMLN pretende conseguir en la mesa de negociaciones lo que no ha conseguido en el terreno de batalla, porque precisamente ha demostrado día a día que es capaz de paralizar la economía nacional, desarticular la vida del país, traer en jaque a la Fuerza Armada, y afirmar su control en amplias zonas de la República. Ese es un poder real, y bien lo saben la Fuerza Armada que está pagando en vidas ese poder, o los Estados Unidos, que predicen ya una sangría de varios años antes de poder lograr la derrota del FMLN. Nueve meses han transcurrido desde las elecciones de marzo y, como enfatiza la última resolución de las Naciones Unidas, el país no se ha acercado a la paz, sino que se ha enfangado más y más en la guerra.

1982 nos ha traído otra dolorosa lección, y es de que la guerra está acabando también con nuestra soberanía nacional. Es claro, en lo económico, El Salvador sobrevive gracias al flujo de dólares norteamericanos, y algo similar puede afirmarse en el terreno militar. Esta dependencia económica y militar ha convertido nuestra soberanía en poco menos que una palabra vacía de sentido. La injerencia de los Estados Unidos ha llegado a límites insospechables no hace mucho en nuestro país, y al mismo diagnóstico llegan tanto las fuerzas oligárquicas, como los militares más sinceros y los grupos revolucionarios. Esta injerencia amenaza con anegar El Salvador en un esquema de confrontación geopolítica mundial, donde nuestros problemas e intereses nacionales son ignorados y sacrificados a los intereses de la seguridad norteamericana. La regionalización del conflicto impulsada por la administración Reagan a los problemas que confrontan los países del área es ya una realidad cuyos costos podrían contabilizarse en muerte y sufrimientos. Por duro que pueda parecer este juicio, todos los hechos parecen indicar que el gobierno actual de los Estados Unidos representa, con su intransigencia e inflexibilidad, el principal obstáculo para una paz justa en El Salvador y en Centroamérica.

Los acontecimientos de 1982, todo el peso de este doloroso año, llevan a la conclusión de que a los salvadoreños no nos queda más que un camino para la paz: el camino del diálogo. Lo han pedido las instancias más diversas del mundo entero, desde las Naciones Unidas hasta el Senado norteamericano; lo han reclamado importantes instancias nacionales, desde la conferencia episcopal hasta los sindicatos más significativos en la vida del país; lo ha demandado Su Santidad, Juan Pablo II, primero en su carta a los obispos salvadoreños, con más vehemencia después en su mensaje del primero de año; lo ha ofrecido sin condiciones una de las partes contendientes; y, sobre todo, la realidad lo exige como la única posibilidad de supervivencia que nos queda si no queremos abocarnos a nuestra aniquilación histórica como nación.

Enero de 1983.

